

Región Murciana

Rechazo masivo a los recortes educativos

Las movilizaciones de la comunidad educativa contra los recortes presupuestarios y en la calidad del servicio público educativo han sido masivamente respaldadas por la población murciana.

EL RENACIMIENTO de la Plataforma por la Educación Pública, con la incorporación de organizaciones del ámbito educativo, marcó la convocatoria de la multitudinaria manifestación del día 10 de mayo, a la que acudieron más de 25.000 personas bajo el lema “Juntos en defensa de la enseñanza pública”. Fue un buen indicador de lo que iba a suceder en las citas huelguísticas de los días posteriores.

El miércoles 16, la huelga general en la Universidad de Murcia en rechazo del Real Decreto Ley 14/2012 tuvo un seguimiento más que masivo. Luego se manifestaron cerca de 10.000 personas. La huelga del día 22 fue secundada por la práctica totalidad del personal de la Universidad Politécnica de Cartagena, el 70% en la pública no universitaria y 60% en la UMU, que vivía su segunda jornada de huelga en menos de una semana.

Por la mañana se manifestaron 5.000 personas en Cartagena, 300 se concentraron en Caravaca, 500 en Lorca, 200 en Águilas, 200 en San Pedro, 150 en Santomera, 200 en San Javier, y otras en Bullas, Jumilla, Alhama, Calasparra, Yecla, Cieza, y 3.000 en la ciudad de Murcia.

Por la tarde más de 60.000 personas dejaron pequeño el recorrido previsto de la manifestación, de manera que cuando se disolvió la cabecera, tras la lectura del manifiesto conjunto de la comunidad educativa leído por un docente, una madre y una alumna, aún había manifestantes que intentaban acceder al punto de partida.

Este éxito se gestó en los días anteriores con una gran participación en las asambleas de trabajadores de los centros y en las reuniones del profesorado con los padres y madres en muchos colegios e institutos.

La noticia de que no se escatiman recursos para tapar los agujeros contables de las entidades financieras han radicalizado las posiciones de rechazo a las políticas de ajuste que ya no se perciben como meros problemas laborales sino como un deterioro intencionado de la enseñanza pública y un atentado a la igualdad de oportunidades que afecta al conjunto de la sociedad.